

INFORME SOBRE LAS PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS EN EL 2017

COSTA RICA

RESUMEN EJECUTIVO

Costa Rica es una república constitucional gobernada por un presidente y una Asamblea Legislativa unicameral, que son elegidos en elecciones pluripartidistas que se celebran cada cuatro años. En el 2014, los votantes eligieron a Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante una segunda ronda de elecciones. En las elecciones legislativas del 2014, un proceso electoral que se realizó el 2 de febrero paralelamente con las elecciones presidenciales, los partidos PAC, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana ganaron escaños y formaron una alianza que les dio el control del directorio de la Asamblea Legislativa. Aunque el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo el mayor número de curules, no logró la mayoría simple requerida. En el 2015, el PLN y otros partidos de oposición formaron un bloque que les dio el control de la Asamblea Legislativa. Todas las elecciones fueron en general consideradas como libres y justas.

Las autoridades civiles mantuvieron control eficiente sobre las fuerzas de seguridad.

No hubo informes de violaciones graves de derechos humanos.

El gobierno investigó y llevó a los tribunales a los funcionarios responsables de cometer abusos.

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, que incluye no someterla a:

a. Privación arbitraria de la vida u otros homicidios ilegítimos o políticamente motivados

No hubo informes de que el gobierno o sus representantes cometieran ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias.

b. Desapariciones

No hubo informes de desapariciones perpetradas por autoridades gubernamentales o a su nombre.

c. Tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

La constitución prohíbe tales prácticas. La Defensoría de los Habitantes recibió 132 quejas por abuso de autoridad, detención arbitraria, tortura y otros tratos inhumanos o degradantes durante los primeros seis meses del año. El abuso de la policía penitenciaria fue una queja recurrente según la Defensoría de los Habitantes, pero muy pocos de los ofendidos continuaron el proceso de presentación de las respectivas denuncias ante las autoridades.

El gobierno investigó, procesó y sentenció a las autoridades del orden responsables de casos confirmados de abuso.

Condiciones en los centros penales y unidades de admisión

Las condiciones en los centros penales fueron adversas a causa de la sobrepoblación, condiciones sanitarias inadecuadas, dificultades para un oportuno acceso a servicios de salud, y la violencia entre los privados de libertad.

Condiciones Físicas: La población penitenciaria sobrepasó la capacidad real del sistema penitenciario en un 30 por ciento según estadísticas oficiales con fecha de junio. La sobrepoblación generó problemas de seguridad e hizo difícil el control de los centros penales, a la vez que contribuyó a problemas de salud. Las condiciones precarias incluyeron espacios inadecuados disponibles para descanso, espumas deterioradas para dormir en el suelo, y acceso insuficiente a los servicios de salud. En los centros penales se consiguieron con facilidad sustancias prohibidas, y el abuso de drogas fue común. La Defensoría de los Habitantes registró 61 denuncias de la población penitenciaria por las condiciones deficientes en centros penales, que incluyeron los centros de detención de migrantes, durante el primer semestre del año. El Ministerio de Justicia fue el encargado del sistema penitenciario, mientras que la Dirección General de Migración estuvo a cargo del centro que albergaba a los migrantes ilegales hasta que estos fueran deportados o se regularizara su condición migratoria.

Los centros de atención institucional San Sebastián, Gerardo Rodríguez, La Reforma, San Rafael, San Carlos, Limón, Pococí, Puntarenas, Liberia, Perez Zeledón, y el Centro Adulto Joven (en la Reforma) continuaban con sobrepoblación, con el mayor problema identificado entre la población indiciada.

Las autoridades mantuvieron en algunas ocasiones a reos indiciados junto a los sentenciados. El centro de admisión de San Sebastián, donde la mayoría de los privados de libertad descontaron prisión preventiva, tenía una población de 705 privados de libertad, quienes estaban ubicados en una instalación planeada con capacidad para 556 privados de libertad.

El centro de detención de migrantes indocumentados ubicado en Hatillo, un suburbio de San José, presentó condiciones de poca ventilación y no contó con áreas adecuadas de recreación. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Defensoría de los Habitantes realizaron monitoreo de las condiciones de detención en el centro de aprehensión, con el ACNUR realizando visitas mensuales de seguimiento y la Defensoría preparando sus informes anuales.

El personal administrativo y de seguridad fue insuficiente para atender las necesidades de la población penitenciaria, incluyendo su seguridad personal. La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia reportó 21 privados de libertad fallecidos en centros penales cerrados desde enero a agosto. Tres de los fallecimientos registrados fueron por homicidio y cuatro por suicidio; el resto fue por causas naturales.

Administración: Las autoridades permitieron a los reclusos y detenidos presentar quejas, sin censura, ante las autoridades penitenciarias y solicitar investigaciones por denuncias creíbles de condiciones inhumanas. En caso de que no se les diera trámite a tales denuncias, los reclusos pudieron remitirlas a la Defensoría de los Habitantes, que realizó el trámite de investigación de las quejas a nivel administrativo. La Defensoría, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, inspeccionó de manera periódica todos los centros penitenciarios.

Observación independiente: El gobierno permitió la evaluación independiente de las condiciones en los centros penales por parte de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales, que incluyeron a representantes de la Defensoría de los Habitantes. Se permitió a los observadores de derechos humanos hablar en privado con los reclusos y oficiales penitenciarios, sin la presencia de las instancias administrativas penitenciarias o de terceras personas.

Mejoras: En febrero, las autoridades penitenciarias iniciaron la puesta en práctica del proyecto de dispositivos electrónicos, tipo tobillera para personas condenadas. En junio el Ministerio de Justicia inauguró dos nuevos módulos en los centros penales de San Rafael y Pérez Zeledón, con capacidad para 640 y 256 privados de

libertad respectivamente, que permiten a los privados de libertad participar en actividades que incluyen estudio, trabajo y reintegración social. Durante el año, el Ministerio de Justicia realizó proyectos de remodelación y otras medidas para reducir la sobrepoblación en el centro de admisión de San Sebastián, después de que un juez emitiera una resolución en el 2016 ordenando a las autoridades el cierre del centro penal en un lapso de 18 meses a menos que se realizaran mejoras.

d. Arresto o detención arbitraria

La constitución prohíbe el arresto y la detención arbitraria y permite a las personas interponer recursos ante tribunales que revisen la legalidad de su detención o arresto, y en general el gobierno respetó esas normas.

Función de la policía y cuerpos de seguridad

El país no tiene ejército. Las autoridades civiles mantuvieron un control eficaz de los 13 cuerpos policiales adscritos a instituciones públicas, entre los que se incluyen el Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial. El Ministerio de Seguridad Pública tiene a su cargo la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas. La Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación y Policía tiene a cargo la Policía Profesional de Migración. La Policía de Tránsito está adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es una dependencia del Ministerio del Ambiente y Energía, y la Policía Penitenciaria pertenece al Ministerio de Justicia. Varios gobiernos locales administran cuerpos de policía municipal. El gobierno posee mecanismos para investigar y castigar el abuso y la corrupción. No hubo informes de impunidad que involucraran a las fuerzas de seguridad durante el año. El número de servicios de seguridad privada autorizados era mayor que el número de policías (28.321 agentes de seguridad en comparación con 14.035 oficiales de la Fuerza Pública). No hubo informes de impunidad que involucraran a las empresas de seguridad privada durante el año.

Procedimiento de arresto y trato de los detenidos

La ley exige que se expidan órdenes judiciales antes de efectuar detenciones, excepto cuando exista una causa evidente para el oficial que realiza el arresto. La ley concede al detenido el derecho a una resolución judicial sobre la legalidad de la detención, durante la lectura de cargos ante un juez, dentro de las siguientes 24 horas posteriores al arresto. La ley otorga el derecho a la fianza, y el rápido acceso

a un defensor y al contacto con familiares. Las autoridades en general respetaron esos derechos. Las personas indigentes tienen acceso a un defensor público costado por el Estado. A aquellas personas que no poseen medios económicos suficientes se les brinda servicios de representación jurídica a través un defensor público. Con autorización judicial, las autoridades pueden incomunicar a los sospechosos por 48 horas después del arresto o, en circunstancias especiales, hasta por 10 días. Entre esas circunstancias especiales se encuentran casos en que previamente se haya dispuesto la prisión preventiva y que existan motivos para estimar que los imputados se pondrán de acuerdo con sus cómplices u obstaculizarán de otro modo la investigación. Los imputados tienen derecho a comunicarse con sus defensores justo antes de rendir declaración ante un juez. Las autoridades informan, con prontitud, a los detenidos de los cargos por los que están siendo investigados. El recurso de hábeas corpus proporciona protección legal a los ciudadanos en contra de amenazas recibidas por parte de la policía; también obliga al juez a dar una explicación clara sobre la base jurídica para la privación de libertad y las pruebas en contra del sospechoso.

Prisión preventiva: Un juzgado penal puede mantener a un sospechoso en prisión preventiva por un plazo ordinario de doce meses, y el tribunal de apelación de sentencia puede prorrogar el plazo ordinario hasta por un año más en causas especialmente complejas. La ley establece que un tribunal revise los casos de los indiciados cada tres meses para determinar si la prisión preventiva es procedente. Si un juez declara un caso como de delincuencia organizada, se aplica un procedimiento especial que establece que el plazo ordinario de prisión preventiva será hasta de veinticuatro meses (el plazo originario de la prisión preventiva podrá ser prorrogado por el tribunal de casación penal, hasta por doce meses más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga). Las autoridades hicieron uso de la prisión preventiva de manera frecuente. Según el Ministerio de Justicia, al 30 de junio, el 16 por ciento de la población penitenciaria estaba constituido por personas en prisión preventiva. En algunos casos las demoras se atribuyeron a investigaciones criminales pendientes. En otros casos se debieron a la acumulación de causas pendientes en los tribunales.

e. Violación al derecho a un juicio justo

La Constitución establece que el Poder Judicial es independiente y el gobierno en general respetó esa disposición de independencia de poderes e imparcialidad. El sistema judicial enfrentó muchos retos que incluyeron demoras significativas en la resolución de conflictos en materia penal y civil y el aumento en el volumen de trabajo.

Procedimiento Judicial

La Constitución y la ley garantizan el derecho a un juicio justo y en general el Poder Judicial, que es independiente, hizo cumplir ese derecho.

Todos los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia, a ser informados, en forma rápida y en detalle sobre los cargos que se les imputan, y a un juicio que garantice el principio de justicia pronta y cumplida. Todos los juicios penales son públicos, excepto aquellos que se llevan a cabo conforme a la Ley Penal Juvenil que son privados para la protección del menor de edad imputado. Los imputados tienen derecho a estar presentes durante el juicio oral y a consultar con un abogado oportunamente, o a que se les provea uno de forma gratuita. Los acusados disponen de tiempo e instalaciones adecuadas para poder preparar la defensa y tienen acceso a interpretación simultánea gratuita durante todo el proceso. Los imputados pueden ser procesados e interrogar a los testigos de la parte contraria, así como presentar testigos y pruebas en su favor. Los acusados tienen derecho a no ser obligados a declarar o a la auto-incriminación forzada. Los imputados tienen derecho a apelar si reciben una sentencia condenatoria. Los tribunales penales de flagrancia, que procesan personas detenidas en el momento en que ocurren los aparentes delitos, proporcionan la misma protección y los mismos derechos que otros tribunales.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de presos o detenidos políticos.

Proceso civil e indemnización por daños

Un Poder Judicial independiente e imparcial preside los procesos judiciales en materia civil, y en éste se pueden entablar demandas incluidas las relativas a la violación de derechos humanos. Se puede exigir la reparación de daños y perjuicios por vía de indemnización administrativa y judicial. Tanto individuos como organizaciones pueden elevar a los sistemas regionales de derechos humanos aquellas decisiones adversas de tribunales locales.

f. Interferencia arbitraria o ilícita en la privacidad, familia, hogar o correspondencia

La Constitución prohíbe tales acciones y no se dieron informes de que el gobierno no respetara estas prohibiciones.

Sección 2. Respeto por las libertades civiles, tales como:

a. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa

La Constitución establece la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, y el gobierno en general respetó esos derechos. Una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento se combinaron para asegurar la libertad de expresión.

Libertad de uso de Internet

El gobierno no impuso restricciones o interrumpió el acceso a Internet o censuró contenidos en línea, y no hubo informes creíbles de que el gobierno monitoreara comunicaciones privadas sin la correspondiente autorización judicial. La Unión Internacional de Telecomunicaciones reportó que en el 2016 un 66 por ciento de las personas usaron Internet.

Libertad académica y actividades culturales

No hubo restricciones del gobierno a la libertad académica o las actividades culturales.

b. Libertad de reunión y de asociación pacífica

La Constitución establece el derecho a la libertad de reunión y de asociación, y el gobierno en general respetó esos derechos en la práctica.

c. Libertad religiosa

Refiérase al Informe del Departamento de Estado sobre *Libertad Religiosa Internacional* en: www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de movimiento

La Constitución y las leyes establecen los derechos de libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y en general el gobierno respetó esos derechos en la práctica. El gobierno cooperó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras organizaciones humanitarias en la prestación de servicios de protección y ayuda a las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugio, apátridas y otras personas de interés.

Protección a las personas refugiadas

Acceso a la condición de refugio: La legislación contempla el estatuto de refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a la población refugiada. Por ley, las autoridades deben resolver las peticiones en el transcurso de tres meses después de haber sido recibidas, pero la demora en la resolución de las solicitudes de refugio era de un promedio de diez meses.

El número de personas solicitantes de la condición de refugio aumentó de manera significativa en los últimos años. La Unidad de Refugio recibió 3.156 solicitudes entre enero y junio, principalmente de Venezuela, El Salvador y Colombia, en comparación con las 4.470 solicitudes recibidas durante el 2016.

El Tribunal Administrativo Migratorio, instancia que revisa los procesos de apelación, tenía un acumulado de aproximadamente 1.056 solicitudes de refugio pendientes. El ACNUR proveyó apoyo a la Unidad de Refugio y al Tribunal Migratorio Administrativo para contratar asistencia legal y administrativa adicional en aras de evitar la generación de casos pendientes.

Empleo: La normativa proporciona a los solicitantes de la condición de refugio la oportunidad de obtener permisos de trabajo temporal cuando se vence el plazo de tres meses dados por ley para resolver su trámite. Pocos solicitantes de la condición tuvieron la oportunidad de ejercer ese derecho de manera eficaz, principalmente por su desconocimiento de la norma. La Unidad de Refugio no estuvo en capacidad de instruir de manera adecuada a los empleadores sobre ese derecho.

Acceso a servicios básicos: Por ley, las personas solicitantes de la condición de refugio y personas refugiadas tienen acceso a los servicios públicos, aunque en ocasiones este acceso se vio obstaculizado por falta de conocimiento sobre la condición de refugio en el país y por sentimientos de xenofobia entre los proveedores de algunos servicios. Por ejemplo, las personas solicitantes de la condición de refugio que son trabajadores independientes (que constituyeron la mayoría de los solicitantes) enfrentaron restricciones para afiliarse de manera voluntaria al sistema de salud pública.

Los solicitantes de la condición de refugio recibieron una identificación provisional que les acreditaba como tales después de apersonarse a una entrevista en la Dirección General de Migración y Extranjería, la que resolvió las solicitudes

en un lapso aproximado de dos meses. Las identificaciones provisionales no poseen las características de otros documentos de identidad nacionales, por lo que aunque las autoridades gubernamentales en general los aceptaron, no así muchos de los ciudadanos costarricenses. Una vez que la persona refugiada es debidamente reconocida, el proceso puede tomar nueve meses adicionales, se le confecciona un documento de identidad que acredita tal condición con las mismas características de la documentación actual migratoria, y tenía un costo aproximado de 37.400 colones (\$66) y es renovable cada dos años.

Soluciones duraderas: Durante el año el gobierno continuó con la implementación del “Mecanismo de Protección en Tránsito”, en coordinación con el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, para el reasentamiento de personas refugiadas hacia un tercer país. El gobierno se comprometió a la integración local, tanto en el ámbito legal como social, de personas refugiadas y a facilitar el proceso de naturalización.

Protección temporal: No se disponía de programas de protección temporal más allá de la condición de refugio. Debido a una baja tasa de reconocimiento (de aproximadamente un 13 por ciento de los solicitantes de refugio durante los primeros seis meses del año) el ACNUR debió considerar el creciente número de denegatorias como personas de interés necesitadas de protección internacional. El ACNUR proporcionó apoyo y acceso a los programas de integración para aquellas personas a quienes se les denegó la solicitud de refugio e interpusieron recursos de apelación. Los individuos que solicitaron la condición de refugio procedían principalmente de Venezuela, El Salvador, y Colombia; la mayoría eran hombres adultos y grupos familiares.

Personas apátridas

El Ministerio de Relaciones Exteriores colaboró en los esfuerzos del ACNUR por la situación apátrida que sufren muchas poblaciones indígenas e informó que la condición de apátrida no fue reconocida para ninguna persona durante los primeros seis meses del año. No se reportó ningún caso de persona apátrida que también hubiese solicitado la condición de refugio. Continuaron ocurriendo casos de personas apátridas entre indígenas menores de edad, así como de hijos menores de edad de trabajadores estacionales en las zonas fronterizas con Panamá y Nicaragua, derivados de las dificultades para la inscripción de los nacimientos. Miembros de la etnia indígena panameña Ngöbe-Buglé se desplazaron a trabajar en fincas costarricenses, y en algunas ocasiones sus hijos nacieron allí. En estos casos, a los niños Ngöbe-Buglé no se les registró como ciudadanos costarricenses porque las

familias no consideraron necesario inscribirlos, pero tampoco se les registró en Panamá. Aproximadamente se vieron afectados unos 1.200 menores. Las autoridades de gobierno trabajaron junto con el ACNUR en un programa de registro de nacimientos y entregaron documentos de identidad a las personas apátridas conocidas como “Chiríticos”. Se enviaron brigadas móviles a las fincas de café en zonas remotas para la identificación y registro de casos. El ACNUR y el Registro Civil iniciaron un proyecto en la frontera norte dirigido a individuos de origen nicaragüense a fin de facilitar los procedimientos para la inscripción tardía de nacimientos.

Sección 3. Libertad de participación en el proceso político

La Constitución y las leyes garantizan a los ciudadanos el derecho a elegir a sus gobernantes en elecciones libres y justas realizadas por voto secreto, y basadas en el sufragio universal e igual.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: En el 2014, los votantes eligieron presidente a Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante una segunda ronda electoral, después de que ninguno de los candidatos obtuvo el 40 por ciento de los votos válidos en primera vuelta. Las elecciones presidenciales y legislativas se llevan a cabo de manera simultánea. En las elecciones legislativas el Partido Liberación Nacional obtuvo la mayoría de votos, pero tres partidos —el PAC, Frente Amplio y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)— obtuvieron suficientes curules de las 57 que componen la Asamblea Legislativa, para conformar una alianza que obtuvo el control durante la primera legislatura en el 2014. Durante la elección del directorio en el 2015, el PLN y otros partidos de oposición formaron un bloque que les dio el control de la Asamblea. Durante las elecciones municipales del 2016, los partidos PLN y PUSC obtuvieron el control en 62 de las 81 municipalidades. Observadores consideraron en general las elecciones como libres y justas. La misión de la Organización de Estados Americanos que observó las elecciones hizo mención especial a la implementación por primera vez del voto en el extranjero.

Participación de las mujeres y las minorías: Ninguna normativa limita la participación de las mujeres y miembros de las minorías en el proceso político, y éstos sí participaron. Las mujeres y las personas afrodescendientes estuvieron representadas en el gobierno, no así las personas indígenas. En mayo del 2016, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió una resolución que impone a los

partidos políticos cuotas de género más estrictas, en la que se reafirma la actual jurisprudencia que establece que los partidos deben respetar la paridad de género en las listas de aspirantes y se confirma la paridad de género de manera vertical. El Código Electoral establece ahora que un mínimo de un 50 por ciento de los aspirantes a cargos de elección popular deben ser mujeres, y que las nóminas de elección por partido deben utilizar el mecanismo de alternancia por género.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en la función pública

Por ley se establecen sanciones penales por delitos de corrupción en la función pública, y el gobierno en general hizo cumplir esa legislación de manera eficiente. Hubo numerosos informes de corrupción durante el año.

Corrupción: En julio, se empezó a estudiar un posible caso de corrupción y tráfico de influencias relacionado con créditos y directrices para beneficiar al importador de cemento, Juan Carlos Bolaños. La Asamblea Legislativa, la Superintendencia General de Entidades Financieras, y el Poder Judicial iniciaron investigaciones sobre las causas de porqué un banco público otorgó grandes créditos sin las garantías colaterales correspondientes, y si políticos destacados estaban involucrados en tráfico de influencias. No se habían presentado acusaciones específicas hasta octubre.

Declaración de situación financiera: Los funcionarios públicos están sujetos a normativa que obliga a aquellos que ocupen altos cargos en la administración pública a presentar declaración jurada de renta, bienes y derechos que constituyan patrimonio. Dicha normativa establece que se presente una declaración sobre la situación patrimonial de los funcionarios nombrados y elegidos por votación. El contenido de estas declaraciones es confidencial. Existen sanciones administrativas previstas en la ley por incumplimiento, y esa normativa identifica los bienes y derechos que los funcionarios públicos deben declarar. Los funcionarios públicos electos están obligados a declarar cuando ingresan a un cargo, cada año, y al final de un nombramiento.

Sección 5. La actitud del Gobierno con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de supuestos abusos a los derechos humanos

Un gran número de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales operaron en general sin restricción gubernamental, e investigaron y

publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios de gobierno se mostraron dispuestos a cooperar y receptivos a sus puntos de vista.

Instituciones gubernamentales de derechos humanos: La Defensoría de los Habitantes vela para se tomen acciones o se prevenga la inacción en el sector público que tenga un impacto en los derechos e intereses de los ciudadanos. La Defensoría de los Habitantes está adscrita a la Asamblea Legislativa, que nombra al funcionario en su cargo por cuatro años y proporciona financiamiento para la operación de sus oficinas. El Defensor de los Habitantes participa en la redacción de las leyes y en el proceso legislativo, promueve la buena administración y la transparencia, y presenta un informe anual a la Asamblea con recomendaciones no vinculantes. Una comisión especial en la Asamblea Legislativa estudia y presenta informes sobre temas relacionados a la violación de derechos humanos, y además esa comisión dictamina los proyectos de ley en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley penaliza la violación sexual de hombres y mujeres, incluyendo la violación ocurrida dentro del matrimonio y la violencia doméstica, e impone penas de prisión de 10 a 18 años por ese delito. El Poder Judicial en general hizo cumplir la legislación.

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) reportó que durante el primer semestre de 2016 fallecieron 16 mujeres (incluyendo siete femicidios). La ley prohíbe la violencia doméstica y establece medidas de protección para las víctimas de la violencia doméstica. Estos delitos se castigan con penas de prisión que van de 10 a 100 días por amenazas agravadas, hasta 35 años por homicidio agravado, que incluyen penas de 20 a 35 años de prisión a los individuos que den muerte a sus parejas

Hostigamiento sexual: La ley prohíbe el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo y en instituciones educativas, y el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social en general hicieron cumplir esa prohibición. La ley impone sanciones que van desde una amonestación escrita hasta el despido, y en situaciones más graves se puede entablar una denuncia por la vía penal.

La coacción en el control demográfico: No se presentaron reportes de aborto forzado, esterilización involuntaria, u otros métodos coercitivos de control de la población. Estimaciones de mortalidad materna y la tasa de uso de anticonceptivos se encuentran disponibles en:

www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/.

Discriminación: Se garantiza a las mujeres la misma condición y los mismos derechos que a los hombres. Por ley se prohíbe la discriminación contra las mujeres y el gobierno está en la obligación de promover la igualdad política, económica, social y cultural. Por ley se establece que las mujeres y los hombres deben recibir igual pago por el mismo tipo de trabajo. En el 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estimó que la brecha salarial entre hombres y mujeres fue de un 92 por ciento.

Menores de edad

Registro de nacimiento: La ciudadanía se adquiere por nacimiento en el territorio del país o si el padre o madre es costarricense nacido en el territorio. El registro de nacimientos no fue automático en todos los casos y algunos menores inmigrantes se encontraron especialmente en riesgo de carecer de nacionalidad al no tener acceso a documentos legales de identidad si los padres de familia no los inscribieron en el registro civil.

Abuso de menores: El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) reportó que los casos de violencia contra personas menores de edad y adolescentes continuaron siendo motivo de preocupación. Para información adicional, ver www.unicef.org/protection/.

Matrimonio forzado o de menores: La edad mínima para contraer matrimonio es 18 años. La Asamblea Legislativa aprobó la ley que prohíbe las relaciones impropias, que entró en vigencia el 13 de enero, y que castiga con cárcel las relaciones sexuales con menores de edad, y de manera específica prohíbe el matrimonio con menores. El delito de relaciones sexuales con una persona menor de edad se castiga con penas de prisión de hasta tres años cuando la víctima es menor de 15 años, o menor de 18 años de edad si la persona adulta es al menos 5 años mayor. La ley prohíbe el matrimonio de personas menores de 18 años.

Explotación sexual de menores: La edad de consentimiento se alcanza a los 18 años. La ley penaliza la explotación sexual comercial de personas menores de

edad y establece sanciones de hasta 16 años en prisión. La ley penaliza el estupro e impone penas de prisión que van de dos a 10 años, y de tres a ocho años para el delito de pornografía infantil. El gobierno identificó el turismo sexual como un serio problema.

Sustracción internacional de menores: El país es Estado Parte del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores. Para mayor información véase el *Informe Anual del Departamento de Estado sobre Sustracción Internacional de Menores* en: travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html.

Antisemitismo

Según el Centro Israelita Sionista, en el país había alrededor de 3.000 personas judías. No se reportó ningún caso de antisemitismo.

Trata de personas

Véase el Informe Anual sobre *Trata de Personas* del Departamento de Estado en: www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidad

La Constitución y las leyes prohíben la discriminación en contra de las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir la legislación de manera eficaz. La ley establece de manera clara el derecho al empleo para las personas en condición de discapacidad y establece una cuota de empleo de un 5 por ciento de las posiciones vacantes en el sector público

Aunque la ley establece el acceso a los edificios para las personas con discapacidad, el gobierno no hizo cumplir esta disposición y muchas instalaciones siguieron siendo inaccesibles para la población con discapacidad.

Tanto la política de Estado en educación como el plan nacional de educación superior universitaria establecen el acceso a la educación para estudiantes con necesidades educativas especiales.

El Tribunal Supremo de Elecciones tomó ciertas medidas (procedimientos de votación, centros de votación, material electoral y capacitación a personal) para proporcionar accesibilidad a todas las personas con discapacidad al momento de emitir el sufragio.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

En la Constitución se establece el carácter de Costa Rica como país multiétnico y pluricultural. Sin embargo, según la Defensoría de los Habitantes, el país carece de un marco legal adecuado que permita asegurar los mecanismos para combatir la discriminación, facilitar la adopción de acciones afirmativas para las personas que sufren discriminación y establecer sanciones para aquellos que cometan actos de discriminación.

Población indígena

La tenencia de la tierra continuó siendo un problema en la mayoría de los territorios indígenas. La ley protege las tierras dentro de los veinticuatro territorios indígenas, como propiedad colectiva de las comunidades indígenas que no es transferible; sin embargo, el 38 por ciento de las tierras estaba en manos de personas no indígenas. El 10 de agosto, una persona indígena fue herida durante una disputa, con personas no indígenas, por una finca ubicada en el territorio de Cabagra.

Actos de violencia, discriminación y otros abusos por orientación sexual e identidad de género

La Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y no se podrá practicar discriminación alguna contraria a la dignidad humana. La discriminación en contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género está prohibida por una serie de decretos ejecutivos y políticas en los sitios de trabajo, pero no por leyes nacionales. Las personas transexuales pudieron cambiar su género en sus documentos de identidad a través de un dictamen de un juzgado civil y la posterior inscripción en el Registro Civil.

Se dieron casos de discriminación en contra de personas por su orientación sexual, comprendidos desde el acceso al empleo, abuso de autoridad y educación, hasta el acceso a los servicios médicos. Las organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) operaron sin restricción y promovieron reformas legales.

El 15 de junio, la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social aprobó el suministro del tratamiento hormonal y psicológico para pacientes transexuales.

Estigma hacia las personas con VIH y SIDA

Aunque la normativa prohíbe la discriminación hacia las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA), se presentaron casos de discriminación en los servicios de salud, en el acceso a vivienda, en el empleo y la educación.

Sección 7. Derechos laborales

a. Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva

La legislación protege el derecho de las personas trabajadoras a constituir sindicatos independientes y a unirse a éstos, a negociar colectivamente y a organizar huelgas legales, y el gobierno respetó estos derechos. La ley prohíbe la discriminación antisindical y permite la reinstalación de trabajadores afectados por despidos antisindicales. Limitaciones en el número mínimo de empleados (12) necesarios para constituir un sindicato puede haber obstaculizado la libertad de asociación en las pequeñas empresas. La ley permite a los trabajadores extranjeros formar parte de sindicatos, pero no les permite ejercer cargos de autoridad dentro los sindicatos, a excepción de aquellos trabajadores extranjeros casados con costarricenses y, con un mínimo de cinco años de residencia en el país. Los sindicatos deben inscribirse, y la legislación establece un plazo de 15 días para que las autoridades correspondientes respondan a las solicitudes de inscripción. El 25 de julio la nueva Ley de Reforma Procesal Laboral entró en vigencia y disminuyó los requisitos legales para el ejercicio del derecho de huelga, cambiando el porcentaje mínimo requerido de votos para aprobar una huelga en una empresa de un 60 por ciento a un 50 por ciento. La ley restringe el derecho a huelga para los trabajadores en servicios designados como esenciales por el gobierno, que incluyen los sectores de las refinerías de petróleo y los puertos que no son reconocidos como servicios esenciales de conformidad con los estándares internacionales. El 25 de julio entro en vigencia el nuevo código procesal laboral (ley No. 9343) diseñado para reducir el tiempo de duración de los procesos en los tribunales laborales, incluidos aquellos relacionados con discriminación sindical, así como modificar las reglas de libertad de asociación y libertad sindical en los tribunales.

Por ley todos los empleadores tienen la obligación de celebrar una convención colectiva con el respectivo sindicato si más de una tercera parte de la fuerza laboral así lo solicita, incluyendo trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, sin embargo, la ley permite los arreglos directos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. La ley también autoriza la formación de otros dos tipos de

organizaciones de trabajadores únicas en el país: las “asociaciones solidaristas”, que tienen rango constitucional y en las que tanto empleadores como empleados pueden ser miembros, y que principalmente se encargan de administrar los fondos de reserva para prestaciones, así como los “comités permanentes” órganos a nivel de empresa compuestos por no más de tres miembros, quienes se encargarán de negociar “acuerdos directos” con los empleadores. Ambas entidades pueden coexistir y compartir membresía entre los sindicatos. La ley prohíbe a las asociaciones solidaristas representar a los trabajadores en negociaciones colectivas o, de alguna otra forma asumir las funciones de los sindicatos o entorpecer la formación de éstos. La legislación también establece que los miembros de los comités permanentes pueden ser elegidos libremente por votación secreta sin la intervención del empleador.

Aunque a los trabajadores del sector público se les permite efectuar negociaciones colectivas, una resolución de la Corte Suprema resolvió que algunos beneficios recibidos por ciertos funcionarios públicos constituían un privilegio irrazonable y desproporcionado, y derogó algunas cláusulas de convenciones colectivas de trabajo en el sector público descentralizado institucional, por lo tanto, se restringió ese derecho en la práctica.

El gobierno en general hizo cumplir la legislación laboral, aunque algunos procesos judiciales enfrentaron atrasos y apelaciones. Aunque la normativa laboral vigente establece sanciones (multas) por acciones u omisiones en las que se incurran, solo el Poder Judicial tiene la autoridad para imponer tales sanciones. Las causas llegan al Poder Judicial tanto a través de inspecciones laborales como de las denuncias interpuestas por los trabajadores. La legislación establece que los inspectores de trabajo deben iniciar procedimientos judiciales después de agotar el proceso administrativo, el que involucra una visita inspectiva inicial, una notificación de la infracción al empleador, un período para corregir la infracción, una reinspección, y (si la infracción persiste) un informe final sobre la infracción. La base de referencia para determinar el monto de las multas es la severidad de la infracción y se basa en el salario mínimo de ley. Las sanciones impuestas no tienen una finalidad disuasoria ya que las causas se resuelven en los tribunales laborales mediante largos procesos. A fin de reducir los tiempos de espera, el nuevo código procesal laboral reemplaza los procedimientos escritos por audiencias, requiere que las denuncias sean procesadas en un plazo de dos años, y establece un procedimiento sumarísimo para las denuncias por discriminación. El nuevo código procesal laboral también fortalece las protecciones para los miembros de los sindicatos, que incluyen protección contra la discriminación por

afiliación laboral y protecciones especiales por medio de procedimientos sumarísimos.

Se respetaron en general la libertad de asociación y de negociación colectiva. Las organizaciones sindicales sostuvieron que en la práctica las asociaciones solidaristas organizaron y controlaron comités permanentes en muchos sitios de trabajo, y que a su vez establecieron acuerdos directos. Los sindicatos también afirmaron que los empleadores a veces exigían la membresía a una asociación solidarista como una condición para el empleo. Tales asociaciones solidaristas y comités permanentes, en la medida en que desplazaron a las organizaciones sindicales, afectaron la independencia de las organizaciones de trabajadores de la influencia de los empleadores y contravinieron el derecho de sindicación y de negociación colectiva. En años recientes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó una expansión de arreglos directos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados, y expresó preocupación por la desproporción entre el bajo número de convenciones colectivas en el sector privado y el alto número de arreglos directos concluidos por trabajadores no sindicalizados. El Ministerio de Trabajo celebró siete sesiones de trabajo con sindicatos y empleadores para tratar temas relacionados en materia de negociaciones de convenciones colectivas de trabajo durante el primer semestre del año.

Se identificaron algunos casos de empleadores que despidieron a aquellos trabajadores que trataron de organizarse en sindicatos. El Ministerio de Trabajo atendió siete denuncias de persecución sindical de enero a julio. Se recibieron informes de que algunos empleadores preferían usar horarios “flexibles” o contratos temporales, lo que hacía más difícil para los trabajadores organizarse y negociar en forma colectiva. Trabajadores agrícolas migrantes con frecuencia fueron contratados mediante la modalidad del contrato temporal (por cinco meses) a través de intermediarios, enfrentando discriminación sindical y retos para organizarse, y a menudo fueron los más vulnerables a la explotación laboral.

La OIT indicó que no encontró grupos sindicales operando en zonas francas industriales e identificó en esas zonas un ambiente hostil para la organización sindical. Los sindicatos afirmaron que, debido a los esfuerzos de los trabajadores por organizarse en esas zonas, los dirigentes sindicales se enfrentaron a despidos injustificados, amenazas e intimidación, y alegaron que algunos empleadores mantuvieron listas de trabajadores identificados como activistas.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio en casos que involucren el movimiento de la víctima. La ley establece penas de prisión por el delito de trata de personas, que incluye la explotación laboral –cuando ésta involucre movimiento– con penas de prisión que van de seis a diez años. La pena de prisión aumenta de ocho a 16 años si median circunstancias agravantes en la comisión del delito. La Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público reportó cuatro investigaciones realizadas durante los primeros seis meses del año, que incluyeron dos personas forzadas a servicio doméstico. Dos casos de años anteriores continuaban abiertos; un tercer caso, que involucraba a dos víctimas menores de edad, estaba listo para la formulación de la acusación; un cuarto caso, que involucró a cinco víctimas, incluyendo una persona menor de edad, se encontraba todavía en etapa de investigación. Las penas en general fueron eficaces para producir un efecto disuasorio contra el delito.

Véase también el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la *Trata de Personas* en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y la edad mínima para el empleo

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece la edad mínima de acceso al empleo en 15 años sin excepción; la norma deroga implícitamente la edad mínima de 12 años estipulada en el Código de Trabajo, el que no había sido reformado al finalizar el año para reflejar ese cambio. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años de edad pueden trabajar un máximo de seis horas diarias y treinta y seis horas semanales. La ley prohíbe el trabajo nocturno y las horas de trabajo extraordinario en el caso de menores de edad. La normativa impide a aquellos menores de 18 años involucrarse en labores riesgosas o insalubres, y especifica una lista de ocupaciones peligrosas. El gobierno en general hizo cumplir la normativa contra el trabajo infantil de manera eficiente en el sector formal de la economía, pero no así en el sector informal.

Se identificó el trabajo infantil principalmente en la economía informal, y de manera especial en los sectores agrícola, comercial e industrial. Las peores formas de trabajo infantil se identificaron en el sector agrícola en pequeñas parcelas de terceros en el sector formal y en parcelas de economía familiar en el sector informal. En la Encuesta Nacional de Hogares 2016, aplicada por una institución del gobierno, se identificaron 30.369 menores de edad trabajadores, lo que representa una tasa de ocupación de 3,1 por ciento de las personas menores de edad entre cinco y 17 años. La explotación laboral de menores aparentemente ocurrió en algunas ramas del sector servicios, tales como en construcción, pesca, ventas

ambulantes, servicio doméstico, y se reportó que algunos menores fueron víctimas de la explotación sexual (véase la Sección 6, Menores de edad).

Mientras el Ministerio del Trabajo es responsable de implementar y tomar acciones administrativas en contra de las posibles infracciones o incumplimiento de la normativa que protege contra el trabajo infantil, el Ministerio Público interviene en casos de las peores formas de trabajo infantil. Como con otra normativa laboral, la autoridad responsable de sancionar a los empleadores por infracciones a la ley laboral corresponde exclusivamente al sistema judicial después del agotamiento de la vía administrativa. Los montos de las multas se determinan según la severidad de la infracción y se expresan en salarios mínimos legales que sirven de base para fijar las multas. Las sanciones fueron lo suficientemente severas para disuadir a los infractores.

El gobierno continuó con la puesta en marcha de la programación para erradicar el trabajo infantil y sus peores formas mediante la asistencia individualizada a través de visitas, entrevistas e inspecciones en escuelas y lugares de trabajo. En el 2016, el Ministerio de Trabajo detectó y atendió a 420 personas menores de edad, de las cuales 100 eran menores de 15 años en trabajos peligrosos, los que fueron referidos a las instituciones gubernamentales para ser incluidos en programas sociales. El ministerio informó que en la gran mayoría de los casos los empleadores recibieron prevenciones, y en 57 de los casos que involucraron menores de 15 años y adolescentes trabajadores, 10 empleadores fueron multados y siete fueron referidos a juzgados de trabajo entre julio del 2016 y junio del 2017.

Véase también el Informe del Departamento de Trabajo con las *Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil* y *La Lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzado* en www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/.

d. La Discriminación con Relación al Empleo o la Ocupación

Las leyes y los reglamentos prohíben la discriminación por motivos de raza, color, género, creencias religiosas, opinión política, nacionalidad o ciudadanía, origen social, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, edad, idioma, estatus positivo para VIH u otras enfermedades transmisibles. El nuevo código procesal laboral prohíbe la discriminación por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical o situación económica. El gobierno implementó de manera eficaz estas leyes y reglamentos y

las sanciones fueron lo suficientemente severas para disuadir a los infractores. El Ministerio de Trabajo reportó 20 casos de discriminación entre julio del 2016 y junio del 2017. El ministerio inició un proceso de inspecciones de trabajo con un enfoque de género, para identificar áreas de vulnerabilidad. El Ministerio de Trabajo reportó que se realizaron 171 visitas inspectivas con enfoque de género como parte del programa de Trabajo Decente durante el primer semestre del año.

Se dieron casos de discriminación en el ámbito laboral y el mercado de trabajo en contra de personas con discapacidad y población LGBTI. La discriminación ocurrió contra trabajadores migrantes, y hubo informes de situaciones en que empleadores utilizaron la amenaza de deportación para retener sus salarios.

e. Condiciones aceptables de trabajo

El consejo nacional de salarios del Ministerio de Trabajo establece, dos veces al año, los salarios mínimos para los sectores público y privado. El salario mínimo mensual para el sector privado osciló entre 178.703 colones (\$316) para las servidoras domésticas y 629.395 colones (\$1.114) para los graduados universitarios a partir del 1 de enero. Según estadísticas del INEC, en el 2016 la línea de pobreza era de 105.937 colones (\$188) en áreas urbanas y 81.685 colones (\$145) en áreas rurales. El salario mínimo aplica por igual para trabajadores costarricenses y migrantes. La legislación establece la jornada de trabajo, las horas extraordinarias, los días de descanso y el derecho a vacaciones anuales. Los trabajadores en general deben trabajar un máximo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas a la semana. Todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de labores, excepto en el sector agrícola, y a vacaciones anuales pagadas. La normativa establece que el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 50 por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Aunque no existe una prohibición establecida por ley para la jornada extraordinaria obligatoria, el Código de Trabajo estipula que el día laboral no puede exceder las 12 horas, excepto en el sector agrícola cuando exista “riesgo inminente de peligro...para la cosecha” en caso de que no puedan sustituirse trabajadores o suspenderse las labores de los que están trabajando.

El gobierno mantiene una autoridad dedicada al cumplimiento de los estándares de seguridad y salud ocupacional. El Consejo Nacional de Salud Ocupacional (CSO) del Ministerio de Trabajo es la autoridad reguladora tripartita integrada por el sector laboral, patronal y gubernamental con competencias en la materia. De acuerdo a organizaciones laborales, el gobierno no implementó estos estándares de manera eficaz en los sectores formal e informal.

Los trabajadores que busquen ser removidos de condiciones que puedan poner en riesgo su integridad y salud, no podrán hacerlo sin arriesgar su empleo. Según el Ministerio de Trabajo, esta es una responsabilidad compartida entre el empleado y el empleador. Por ley se asigna la responsabilidad al empleador, incluyendo el acceso de las autoridades en Salud Ocupacional para el examen de las condiciones en los centros de trabajo, pero también autoriza a los trabajadores a buscar auxilio por parte de las autoridades competentes (Salud Ocupacional o inspectores de trabajo) por el incumplimiento y la aplicación de alguna condición laboral contemplada en la legislación nacional, incluidos los riesgos del trabajo.

La Dirección de Inspección del Trabajo (DNI) del Ministerio de Trabajo es la encargada de la labor inspectiva en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros. La DNI empleó a inspectores laborales que investigaron todo tipo de infracciones laborales, pero el número de inspectores no fue suficiente para el cumplimiento de la legislación laboral. Según el Ministerio de Trabajo, las inspecciones se realizaron en respuesta a denuncias o por iniciativa de los inspectores. La Inspección del Trabajo afirmó que pueden visitar a los empleadores, tanto en el sector formal como informal, y que las inspecciones no se anuncian previamente.

El Ministerio de Trabajo en general tramitó las quejas de manera eficaz mediante el envío de equipos de inspección para investigar y coordinar cada una de las acciones de seguimiento. Los inspectores de trabajo no están autorizados a imponer multas o sanciones a los empleadores que no cumplan con la normativa laboral; más bien los inspectores investigan y realizan el proceso de denuncia ante los tribunales de trabajo. El procedimiento sancionatorio a empresas y la restitución del pago de salarios y horas extraordinarias laboradas puede tardar varios años en su tramitación, un problema que el nuevo Código Procesal Laboral busca solucionar.

El Ministerio de Trabajo, en general, hizo cumplir de manera eficaz la normativa sobre salarios mínimos en el área de San José, pero no así en zonas rurales, en particular en lugares donde se empleó a un mayor número de migrantes, y en el amplio sector informal, que comprende un 43 por ciento de la fuerza de trabajo. El Ministerio de Trabajo reconoció públicamente que muchas personas trabajadoras, incluidos trabajadores del sector formal, recibieron menos del salario mínimo. Durante el primer semestre, el ministerio realizó 4.973 visitas en los cantones considerados prioritarios en razón de su bajo nivel de desarrollo en un esfuerzo por

intentar visualizar esa situación y llevar la intervención de la DNI hasta estas zonas.

Según el INEC, el 44 por ciento de la población económicamente activa en el sector no agrícola se encontraba en el sector informal de la economía. El Ministerio de Trabajo, por medio del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social proporcionó asistencia técnica y acceso al crédito a microempresarios informales en condición de pobreza, a fin mejorar sus condiciones productivas y de trabajo en la economía informal.

Observadores expresaron preocupación sobre las condiciones de explotación laboral en pesquería, pequeñas empresas y en actividades agrícolas. Los sindicatos de trabajadores también informaron sobre violaciones sistemáticas a los derechos y normativa laboral con respecto a las condiciones laborales, al pago de la jornada extraordinaria y salarios en las industrias de zona franca. Los sindicatos denunciaron violaciones al pago de la jornada laboral extraordinaria, tales como no recibir pago alguno o la obligatoriedad por la jornada laboral extraordinaria, que fueron comunes en el sector privado y de manera particular en las zonas francas y en la agricultura. Se dieron informes de que trabajadores agrícolas, en particular trabajadores migrantes en la industria de la piña, laboraron en condiciones insalubres, que incluyeron estar expuestos a sustancias químicas sin la debida capacitación. El Instituto Nacional de Seguros registró 63.608 denuncias por accidentes o enfermedades laborales, así como 68 fallecidos en el lugar de trabajo entre los meses de enero y junio.